



© JORGE SIERRA

EL CAMPO EN LA ENCRUCIJADA

El actual sistema agroalimentario sigue dando muestras de su fallido funcionamiento.

Cada vez es más global, complejo, interdependiente y, a la vez, más vulnerable al cambio climático y a diferentes crisis como las que hemos vivido en los últimos tiempos (pandemias, conflictos bélicos, incremento del precio de los alimentos...). Se trata de un sistema que fomenta una agricultura y ganadería industrializada basada en los combustibles fósiles y los insumos químicos —como plaguicidas y fertilizantes—, en el consumo excesivo de un agua cada vez más escasa, en la mano de obra precarizada o en las materias primas baratas importadas de terceros países, que no siempre cumplen los mismos requisitos legales que se exigen a nuestras producciones.

Es un modelo que demanda alimentos baratos y desestacionalizados, que poco tiene que ver con dietas sostenibles como la mediterránea, recomendadas por las personas expertas en salud, **y que lleva al límite a agricultores y agricultoras y a la naturaleza** en aras de “alimentar al mundo”, **mientras un tercio de los alimentos acaban en la basura.**

Este modelo genera injusticias, desigualdades e incoherencias dentro y fuera de nuestras fronteras **y es incapaz de dar respuesta a los urgentes retos económicos, sociales y ambientales** a los que se enfrenta: la subida imparable del precio de los alimentos sin que beneficie necesariamente a los y las agricultoras, sumado al incremento de los costes de producción; el efecto de la sequía, especialmente sobre secanos y pastos, y agravada por la sobreexplotación de ríos y acuíferos de la producción agroindustrial; y el impacto ya visible del cambio climático.

En este contexto, pierde en especial la agricultura y la ganadería ecológica familiar, fincas de alto valor social que producen alimentos cuidando de las personas y de la naturaleza y que abandonan su actividad por falta de apoyo público adecuado. Como el de la Política Agraria Común, que sigue repartiendo la mayor parte de sus fondos entre grandes explotaciones de carácter eminentemente industrial, y la mayor parte de estos beneficiarios residiendo en grandes capitales donde no hay superficie cultivada. **Modelos ambiental y socialmente sostenibles que, además, no pueden competir en las mismas condiciones con las producciones industriales de bajo coste**, en un mercado que prima precio frente a sostenibilidad.



© JORGE SIERRA

POR EL FUTURO DEL CAMPO

WWF ESPAÑA • FEBRERO 2024

FRENTE A ESTA REALIDAD PROPONEMOS, AUTOCRÍTICA, HONESTIDAD Y COMPROMISO

Autocrítica para reconocer nuestra impotencia, porque uno de los principios que llevamos por bandera no llegue al conjunto de la sociedad: la necesidad de que las personas que trabajan el campo respetuosamente tengan un precio justo por sus producciones y una calidad de vida digna en los pueblos.

Honestidad que pedimos a la clase política y a determinados representantes del sector agrario para evitar el discurso de confrontación y las falsas dicotomías, en especial la que promulga que para salir de la encrucijada actual hay que escoger entre economía y ecología. Cualquier actividad socioeconómica, pero especialmente la agricultura y la ganadería, depende del buen estado de los ecosistemas. Conservar el patrimonio natural y adaptarse al cambio climático es una cuestión de supervivencia, no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza. Y promulgar lo contrario vendiendo falsas soluciones basadas en nuevas infraestructuras, como embalses o trasvases, no harán más que agravar la situación actual.

Compromiso por seguir trabajando por un futuro mejor para estas fincas que dan vida a nuestros pueblos y que nos permiten alcanzar la soberanía en nuestros campos y nuestras mesas. Un futuro que aún podemos construir entre todos y todas, en alianza con organizaciones agrarias, de consumidores, de mujeres rurales... desde los múltiples ángulos que conforman el sistema alimentario.

SI NOS IMPORTA EL CAMPO, HABLEMOS

Desde WWF España vivimos con preocupación, de nuevo, las movilizaciones del campo europeo, y en especial el español, y manifestamos nuestro compromiso con el sector agrario y el medio rural pidiendo una transición verde y justa para el campo y sus gentes.

Nos preocupan las posiciones maximalistas, desde la crispación, que pretenden dar soluciones simples a problemas complejos como al que nos enfrentamos. Nos preocupa también la pretensión de cargar el peso de la culpa de esta situación sobre las políticas ambientales, con discursos que defienden que no se puede disminuir el uso de insumos químicos —como fertilizantes y plaguicidas— en aras de la productividad, o que señalan que el agua de los ríos se pierde en el mar y que se debería emplear para regar. Nos preocupan las soluciones simples que proponen laminar los escasos avances ambientales de la PAC, incluyendo eliminar los eco regímenes y la condicionalidad para recibir fondos públicos.

En definitiva, nos preocupan las proclamas que demonizan los compromisos sociales, económicos y ambientales de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad.

Presentamos nuestras propuestas, no exhaustivas ni perfectas, con el ánimo de alentar un debate fructífero desprovisto de prejuicios y contribuir a la resolución de este problema complejo. Propuestas que parten de la necesidad de reconocer que nos encontramos ante un fallo sistémico que deja de lado a las personas y la naturaleza: la industrialización y mercantilización de la producción, distribución y consumo de alimentos —incluido su desperdicio masivo del campo a los hogares— basada en mano de obra precarizada e insumos químicos.



© JORGE SIERRA

POR EL FUTURO DEL CAMPO

WWF ESPAÑA • FEBRERO 2024

WWF PROPONE

Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a las personas agricultoras y ganaderas que apuestan por la sostenibilidad, incrementando las medidas de transparencia y control a las prácticas desleales en la cadena alimentaria, además de la revisión y modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición agroecológica justa, que incluya una PAC y un PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo y una nueva fiscalidad que aplique los principios de “quien contamina paga” y “quien conserva, recibe”. Además, la recuperación de las infraestructuras y servicios públicos que aseguren la viabilidad del sector primario y prioricen a las pequeñas explotaciones familiares agroecológicas; el impulso a los canales cortos de comercialización y a la venta directa que garanticen alimentos locales, ecológicos y de temporada; la compra pública responsable; y la diversificación productiva del sector primario. Todo ello apoyado en sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento multidisciplinar para la sostenibilidad. Dichos sistemas deben asegurar una transición justa de los modelos que tienen un impacto negativo —como la ganadería industrial o los regadíos en acuíferos sobreexplotados o contaminados— y que deben virar hacia la sostenibilidad, con prácticas dentro de los límites ambientales y sociales.

Distribuir de manera más justa los fondos de la Política Agraria Común para que apoyen a agricultores con dificultades. El 20 % de los beneficiarios (en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala) recibe el 80 % de las ayudas, mientras que la mayoría de fincas agrarias de pequeño o mediano tamaño (a menudo explotaciones familiares) perciben poco o nada. Actualmente la PAC presta más apoyo a la agricultura frente al pastoreo y, en el caso de la primera, al regadío frente al secano. Es necesario que el dinero público se dirija a aquellas fincas de mayor valor social y ambiental, como las de producción ecológica, en red Natura 2000 o Sistemas de Alto Valor Natural.

Alcanzar un mayor compromiso, incluso financiero, de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas sostenibles, con la distribución responsable de alimentos y con los precios adecuados tanto para productores y productoras como para consumidores y consumidoras. E impulsar cadenas de valor en las que riesgos y beneficios se comparten por igual entre todos los eslabones.

Apoyar prácticas agroecológicas que permitan a las explotaciones adaptarse a los cada vez más presentes riesgos climáticos, como inundaciones y sequías, y que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de las fincas, sin menospreciar el necesario apoyo y acompañamiento en caso de catástrofes y fenómenos extremos.

Exigir que las importaciones agrarias cumplan las mismas normas de sostenibilidad, salud, bienestar animal y seguridad que las vigentes en la UE para evitar la competencia desleal, dotando de medios y conocimientos a terceros países, cuando sea necesario, para evitar efectos colaterales indeseados. Del mismo modo, **evitar que los alimentos y productos exportados por la UE tengan impactos negativos sobre países terceros.**

Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por personas que residen y trabajan en el medio rural cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. Asimismo, **crear un sistema público integrado de rescate para la agricultura y la ganadería extensiva familiar en zonas de alto valor natural y, en especial, en la Red Natura 2000**, que asegure rentas y condiciones de trabajo dignas.

Incorporar en las normas estatales —dotándolo de los medios y presupuestos necesarios— los objetivos del Pacto Verde Europeo de reducción del 50 % de uso y riesgo de plaguicidas en la producción de alimentos, por su toxicidad e impactos negativos en la salud de las personas y la naturaleza; de disminución del uso de



fertilizantes en un 20 % para reducir las pérdidas de nutrientes en un 50 % como mínimo; y alcanzar al menos el 25 % de las tierras agrícolas bajo producción ecológica en 2030.

Proporcionar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.), asegurar la digitalización responsable e implantar el teletrabajo para fijar población, prestando especial atención a jóvenes, mujeres y personas mayores. Reclamamos una **política de Estado para el mundo rural**, que comience por reactivar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, para revitalizar la economía de los pueblos, crear empleo estable y de calidad y frenar el despoblamiento bajo el paradigma de la sostenibilidad.

Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural —como las de ganadería extensiva—, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica, prestando especial atención al papel de las **mujeres**.

Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas y evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico.

Garantizar el acceso a una dieta sana y sostenible para el conjunto de la población, con precios justos para el consumo y herramientas adicionales como la compra pública responsable.

Frenar las pérdidas y el desperdicio alimentario, en especial en las fincas agrícolas, revisando la normativa —poniendo especial atención sobre aquellos precios que no cubren los costes de producción— que impulsa la industrialización agraria y exacerba los problemas sociales y ambientales que estamos viviendo. Fomentar medidas de cuantificación y prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena.

Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroalimentarios. Este patrimonio es un recurso clave para el desarrollo rural, forma parte de la esencia de cada territorio y es indispensable para su equilibrio social y económico. Constituye una auténtica cultura que sí representa al medio rural y así debe ser reconocido y respetado desde las ciudades.

Asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas agroalimentarias y del medio rural, con recursos suficientes —tal y como apoyan el Foro Acción Rural o la Coalición PorOtraPAC—, incluyendo la elaboración de la Estrategia Nacional de Alimentación, recientemente anunciada.

Nos enfrentamos a un **fallo sistémico sin precedentes**: un sistema industrializado de producción, distribución y consumo que no funciona ni para las personas, comenzando por las que nos alimentan cada día, ni para la naturaleza. Resolverlo requerirá de una **acción público-privada a nivel estatal** e incluso más allá de nuestras fronteras, **que asegure precios justos para los alimentos, que garantice el dinero público para recompensar a la agricultura y ganadería que produce bienes públicos y que reconozca la valía de las personas profesionales del medio rural**. Solo desde un diálogo constructivo, despolitizado, apartado de los elementos que tensionan y generan crispación y libre de prejuicios, será posible alcanzar los necesarios acuerdos para dar respuestas a la medida de estos grandes retos que abordamos como sociedad.

